

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

**JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE VALLEDUPAR,
CESAR**

CONSTANCIA SECRETARIAL: - Al despacho de la señora juez, informando que en la fecha se recibió vía correo electrónico Acción de Tutela con medida provisional interpuesta por los señores CARLOS ANDRÉS BARBOSA ÁLVAREZ, C.C. 1.007.732.102, DEIMER MARTÍNEZ, C.C. 1.065.626.988, HELIZANA MARÍA GUTIÉRREZ ZULETA, C.C. 39.461.606, LELYS OLIVIO ESTRADA, C.C. 77.020.435, RUTH MARY PÁEZ SUÁREZ, C.C. 1.193.051.219, ABDUL AMIN MÁRQUEZ, C.C. 79.374.339, FREDY ALBERTO CAMARILLO BELEÑO, C.C. 77.171.845, YENIS ALPICIA HERNÁNDEZ CASTILLEJO, C.C. 49.748.711, en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESAR, la cual correspondió a este Juzgado por el reparto efectuado en la Oficina Judicial de esta ciudad a través de S.A.R.J. indicado que fue recibida el día de hoy 04 de agosto de 2023 a las 14:59 horas, ORDENE.

Valledupar, cuatro (04) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

DANIEL DAVID OVALLO ROJAS.

ASISTENTE JUDICIAL.

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
VALLEDUPAR, CESAR

RADICADO:	20001-31-07-004-2023-00062-00.
ASUNTO:	ACCIÓN DE TUTELA.
ACCIONANTE:	CARLOS ANDRÉS BARBOSA ÁLVAREZ, DEIMER MARTÍNEZ, , HELIZANA MARÍA GUTIÉRREZ ZULETA, LELYS OLIVIO ESTRADA, RUTH MARY PÁEZ SUÁREZ, ABDUL AMIN MÁRQUEZ, FREDY ALBERTO CAMARILLO BELEÑO, YENIS ALPICIA HERNÁNDEZ CASTILLEJO.
ACCIONADO:	REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESAR
DECISIÓN:	ADMITE TUTELA.

Valledupar, Cesar, cuatro (04) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

ASUNTO:

Correspondió a esta célula judicial por reparto del día de hoy 04 de agosto de 2023, la acción de tutela interpuesta por los señores CARLOS ANDRÉS BARBOSA ÁLVAREZ, DEIMER MARTÍNEZ, , HELIZANA MARÍA GUTIÉRREZ ZULETA, LELYS OLIVIO ESTRADA, RUTH MARY PÁEZ SUÁREZ, ABDUL AMIN MÁRQUEZ, FREDY ALBERTO CAMARILLO BELEÑO, YENIS ALPICIA HERNÁNDEZ CASTILLEJO, quien actúa en contra de REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESAR, para evitar la causación de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales a AL DEBIDO PROCESO, DERECHOS POLÍTICOS A ELEGIR Y SER ELEGIDOS, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL.

CONSIDERACIONES:

Teniendo en cuenta que el libelo introductorio cumple a cabalidad los requisitos mínimos e informales que requiere la solicitud de amparo constitucional, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, se ADMITE y avoca conocimiento para tramitarla y decidirla.

Ahora bien, en vista de que se trata de una acción constitucional con solicitud de decreto de medida provisional, se estudiará su procedibilidad y/o viabilidad en el caso concreto, a partir del respectivo análisis de los requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional

Respecto de lo anterior, el despacho precisa que acorde con la finalidad protectora de la acción de tutela, las medidas provisionales¹ buscan hacer efectiva dicha protección, cuando de esperarse a la culminación del proceso, las decisiones que se adopten en el fallo podrían resultar ineficaces, es decir, buscan conjurar de manera previa al fallo, un peligro o vulneración que se está presentando o que se percibe como de inminente ocurrencia y que no da tiempo a esperar por un fallo definitivo.

Sobre el particular, la Corte Constitucional señala que "La protección provisional está dirigida a: i) proteger los derechos de los demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio; ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez está facultado para "ordenar lo que considere procedente" con arreglo a estos fines (inciso 2º del artículo transcrito). Las medidas provisionales cuentan con restricciones, debido a que la discrecionalidad que entraña su ejercicio no implica un poder arbitrario u omnímodo. Por ello, la expedición de esa protección cautelar debe ser "razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada"².

Ahora, el decreto de las medidas provisionales solo se justifica ante hechos evidentemente amenazadores y lesivos para los derechos fundamentales del accionante, que en caso de no decretarse podría hacer aún más gravosa su situación; pues, de no ser así, la medida no tendría sentido y el accionante debería esperar los términos preferenciales que estableció el ordenamiento para resolver de fondo la tutela. Es así como al analizar las precisas circunstancias del caso en estudio, el juez determinará si es o no necesaria la adopción de medidas previas a las definitivas del fallo.

Así, el despacho considera que para establecer si es viable decretar la medida solicitada por el accionante, es necesario indagar si la vulneración del derecho fundamental señalado por la parte actora se evidencia de forma manifiesta, si los fundamentos fácticos tienen un principio de prueba sobre su ocurrencia y, si la medida solicitada tiene el efecto útil de proteger el derecho que se busca tutelar. Lo anterior por cuanto la procedencia de la medida cautelar pende de la demostración o de la inminencia a una vulneración de un derecho fundamental, para prevenirla, o de su vulneración actual, para hacerlo cesar.

¹ El artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 señala:

"Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, **suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.**

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado".

² Corte Constitucional, sentencia T-103-18, Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS

Frente a la medida provisional deprecada, esta unidad judicial no encuentra procedente su decreto, pues del análisis de los hechos y las pruebas que se aportó con la solicitud de tutela, no se advierte para este momento, vulneración inminente de los derechos del accionante, que permitan concluir la necesidad de decretar una medida provisional antes de resolverse en esta instancia la tutela que se presentó.

Por consiguiente, no resulta necesario decretar la medida provisional en este momento, fase judicial de admisión de tutela, atendiendo la necesidad de extraer los Elementos materiales de pruebas necesarios para atender en viabilidad lo que en derecho corresponda. Dado que por consiguiente no se observa en este estado procesal que con ella se pueda evitar una situación más gravosa de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, por lo que entonces no es procedente o admisible la medida provisional frente a la presunta urgencia deprecada.

Finalmente, notifíquese a las partes y a los vinculados por el medio más expedito tal como lo dispone el Decreto 2591 de 1991, córrase traslado adjuntando una copia de la demanda al oficio que para notificarlos se libren, con el fin de que en el término de dos (2) días, se pronuncien sobre los argumentos propuestos dentro de la presente acción constitucional

*En mérito de lo anteriormente expuesto, el **JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE VALLEDUPAR,***

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR la presente Acción de Tutela instaurada por los señores CARLOS ANDRÉS BARBOSA ÁLVAREZ, C.C. 1.007.732.102, DEIMER MARTÍNEZ, C.C. 1.065.626.988, HELIZANA MARÍA GUTIÉRREZ ZULETA, C.C. 39.461.606, LELYS OLIVIO ESTRADA, C.C. 77.020.435, RUTH MARY PÁEZ SUÁREZ, C.C. 1.193.051.219, ABDUL AMIN MÁRQUEZ, C.C. 79.374.339, FREDY ALBERTO CAMARILLO BELEÑO, C.C. 77.171.845, YENIS ALPICIA HERNÁNDEZ CASTILLEJO, C.C. 49.748.711, en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESAR

SEGUNDO: NEGAR la medida provisional solicita por la parte accionante, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de este proveído.

TERCERO: Córrase traslado de la solicitud de acción de tutela a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESAR, entregándosele en el mismo copia de la demanda de tutela con sus anexos, para que a través de quien corresponda, en el término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo del oficio correspondiente, remitan a este Juzgado informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, sobre los hechos relacionados por la accionante en su solicitud de tutela.

CUARTO: Así mismo, **OFÍCIESE** a la parte accionada, para que manifieste bajo la gravedad del juramento, quien es el funcionario específico (cargo, jerarquía, nombres y apellidos

completos, documento de identidad) competente de cumplir la orden genérica en caso de que haya lugar en el presente trámite tutelar, así mismo el jerárquico del mismo.

QUINTO: TÉNGASE para que obren como pruebas, los documentos anexos a la demanda de tutela y los demás documentos allegados al expediente por las partes.

SEXTO: PREVENIR al accionado, sobre el hecho de que los informes se considerarán rendidos bajo la gravedad de juramento y se les advierte que la omisión injustificada en él envió de dichos informes o documentos, dará lugar a la imposición de las sanciones que por desacato consagra el artículo 52 del decreto 2591 de 1991.

SEPTIMO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991. Por la Secretaría del Despacho hágase lo de rigor.

RADÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



**LOURDES TONCELL PITRE
JUEZ**